

A decorative graphic consisting of several squares of different colors (yellow, red, white, blue, teal) arranged in a scattered pattern across a dark blue background.

VISIÓN ESG PARA LAS PEC

MARCOS LEGALES EN 10 PAÍSES



ANDE



Thomson Reuters
Foundation

TrustLaw



EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey



Resumen Ejecutivo

La adopción de estándares Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG, o ESG por sus siglas en inglés) es relevante no solo porque los inversionistas están más inclinados a considerarlos en sus decisiones de inversión, sino también debido a su potencial impacto positivo en el desarrollo sostenible, por medio de las [Pequeñas Empresas en Crecimiento \(PEC\)](#).

Si bien la implementación de los criterios ASG es todavía mayoritariamente voluntaria, los gobiernos de todo el mundo están integrando cada vez más estos estándares en sus marcos legales. Por lo tanto, comprender cómo la ley apoya la adopción de los criterios ASG se vuelve esencial.

Sin embargo, la ley por sí sola no es suficiente para asegurar que las empresas apliquen estos estándares. También se necesita inversión para garantizar que el impacto de las prácticas ASG sea duradero.

En este documento presentamos nuestros hallazgos sobre cómo los marcos legales de 10 países apoyan la implementación de estándares ASG, y qué alternativas de financiamiento están disponibles, particularmente para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Hallazgos Clave

Hallazgo Clave 1: Aunque pueden existir disposiciones legales para promover la adopción de ASG, su aplicación (ejecución) es deficiente incluso en países con los marcos legales más avanzados.

Encontramos que incluso en los marcos legales menos avanzados existen leyes y regulaciones que apoyan la adopción de estándares ASG relacionados con género, clima y trabajo decente. Sin embargo, debido a que la aplicación de la ley varía en toda la muestra, se crea una brecha entre estas disposiciones legales y las prácticas reales, la cual permanecerá hasta que mejore el nivel de cumplimiento.

Hallazgo Clave 2: Las sanciones parecen predominar como medidas para promover los estándares ASG, pero pueden no ser los mecanismos más efectivos disponibles.

Los incentivos negativos parecen ser un mecanismo generalizado para gestionar el incumplimiento de la regulación ASG. Sin embargo, en el contexto de una baja aplicación de la ley, estos mecanismos pueden resultar ineficaces. En contraste, casos como la Ley de Empoderamiento Económico Negro de Base Amplia (BBBEE, por sus siglas en inglés) en Sudáfrica ofrecen evidencia de mecanismos positivos, como premios o reconocimientos, que llevaron a la implementación de criterios ASG.

Hallazgo Clave 3: La divulgación es una condición necesaria pero insuficiente para asegurar la adopción de ASG.

Los marcos legales estudiados tienden a poner cierto énfasis en la divulgación de temas ASG, y si bien dicha práctica es relevante para conocer la situación actual y evaluar el desempeño de las iniciativas ASG desplegadas, su utilidad depende de la precisión y confiabilidad de lo que se divulga.

Hallazgo Clave 4: La existencia de mandatos para la adopción de ASG contrasta con la falta de recursos disponibles para apoyar su implementación en las PyMEs.

Las PyMEs están menos preparadas para implementar estándares ASG porque tienen menos recursos disponibles para tales iniciativas (Foro Económico Mundial, 2025). Por lo tanto, el financiamiento externo puede ser crítico para asegurar que adopten estas prácticas. Además, cuando se encontró financiamiento disponible para este tipo de negocios, el acceso se consideró complejo debido a procesos burocráticos para la solicitud, entre otros aspectos.

Hallazgo Clave 5: Los aspectos sociales en los criterios ASG parecen recibir menos atención a favor de los temas ambientales.

Aunque el marco ASG otorga la misma relevancia a las dimensiones social, ambiental y de gobernanza, en la práctica, parece que hay más leyes que abordan problemas ambientales.

Hallazgo Clave 6: Las alianzas público-privadas constituyen un mecanismo con el potencial de reforzar las regulaciones existentes para la adopción de ASG y canalizar el financiamiento de manera más efectiva.

Varios casos indican que las empresas pueden colaborar con los gobiernos para canalizar recursos que promuevan la adopción de ASG. El caso de Coppel en México es un ejemplo de cómo los gobiernos locales podrían ayudar a escalar y facilitar iniciativas del sector privado que tienen como objetivo desarrollar capacidades técnicas en pequeñas empresas. Además, si estas iniciativas integraran los temas ASG como una prioridad, las PyMEs podrían acceder a las herramientas de las que carecen actualmente para dar los primeros pasos en su viaje hacia la sostenibilidad. Tal enfoque permitiría el avance de los objetivos relacionados con ASG a pesar de la actual falta de financiamiento gubernamental.

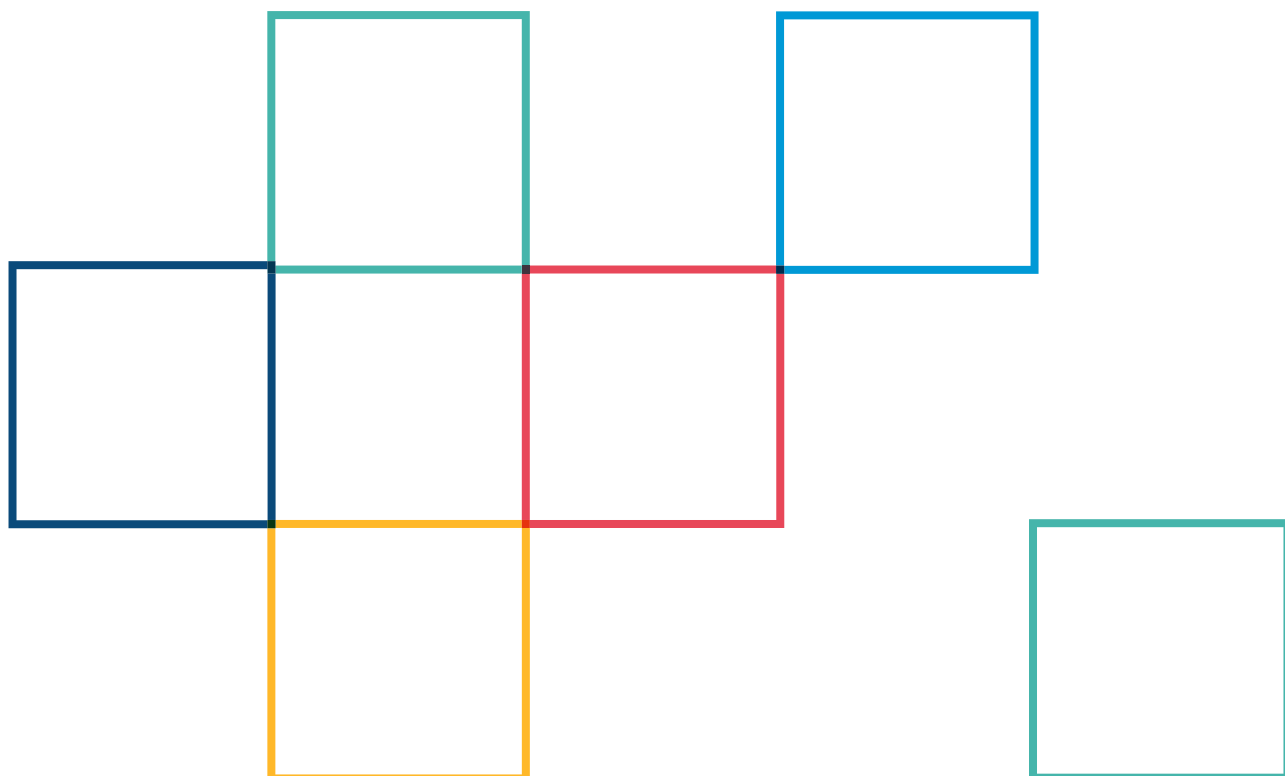
El caso de BanCO₂ también muestra que los gobiernos podrían funcionar como un intermediario eficaz que conecta los fondos empresariales para la conservación ambiental con las personas que brindan servicios ambientales, mejorando el alcance del impacto de los proyectos hacia la dimensión social de los criterios ASG.

Hallazgo Clave 7: La digitalización y centralización de la contratación pública parecen prometedoras para desarrollar empresas más pequeñas y asegurar el cumplimiento de las regulaciones ASG.

Encontramos casos de éxito en Canadá y Alemania que muestran que un enfoque centralizado para la contratación pública podría facilitar el acceso a oportunidades para proveer a agencias gubernamentales, dado que se cumplan ciertos estándares ASG. Al mismo tiempo, estas iniciativas mejoran la transparencia del gasto gubernamental que apoya a proveedores sostenibles. Además, cuando dichas plataformas de contratación responsable se utilizan para promover el aprendizaje y la inspiración a partir de experiencias de pares, su impacto puede multiplicarse potencialmente.

Hallazgo Clave 8: Establecer objetivos para las iniciativas de apoyo ASG a nivel gubernamental no solo crea rendición de cuentas, sino que ayuda a evaluar la eficacia de las iniciativas gubernamentales actuales para promover la implementación de estándares ASG.

Un ejemplo de Australia ilustra cómo las iniciativas gubernamentales que tenían como objetivo beneficiar a las empresas indígenas se fortalecieron estableciendo objetivos específicos, comunicándolos al público y utilizándolos para mejorar continuamente.



A close-up photograph of several green leaves, likely from a plant like a geranium, with numerous clear water droplets resting on their surfaces. The leaves are vibrant green and have a slightly serrated edge. The background is softly blurred, showing more foliage.

Introducción

Este artículo presenta los resultados de la investigación realizada por ANDE, TrustLaw, Thomson Reuters Foundation y equipos legales de firmas de abogados en 10 países: Hogan Lovells en Australia, México y Singapur; Clifford Chance LLP en los Estados Unidos; Machado, Meyer Sendacz e Opice en Brasil; Muñoz Tamayo y Asociados en Colombia; Bowmans en Sudáfrica; Consortium Legal en Guatemala; McInnes Cooper LLP en Canadá; y Allen and Overy LLP en Alemania.

La evolución de la regulación ASG a nivel nacional ha sido moldeada por marcos y estándares internacionales. Referencias clave incluyen los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2011), las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo decente y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD). Más recientemente, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la Unión Europea y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa han establecido nuevos puntos de referencia que influyen en los enfoques regulatorios a nivel mundial, incluidos los países cubiertos por este estudio.

Este estudio se centra en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), incluidas las pequeñas empresas en crecimiento (PEC). Siguiendo la definición de ANDE, las PEC son negocios comercialmente viables con 5 a 250 empleados que tienen un potencial significativo de crecimiento y operan en el “missing middle” (demasiado grandes para las microfinanzas pero a menudo incapaces de acceder al financiamiento bancario tradicional). Las PyMEs, aunque definidas de manera diferente en las distintas jurisdicciones, generalmente comparten características similares y enfrentan desafíos comparables en la adopción de prácticas ASG debido a limitaciones de recursos y una influencia limitada sobre sus ecosistemas empresariales.

El estudio tuvo como objetivo descubrir qué mecanismos legales están disponibles para promover la adopción de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza relacionados con género, clima y trabajo decente en el sector privado, con un enfoque particular en las PyMEs. Esta investigación también intentó identificar vacíos relevantes en los marcos legales de cada país y las mejores prácticas que podrían implementarse en América Latina para facilitar la adopción de estos estándares.



Análisis Comparativo

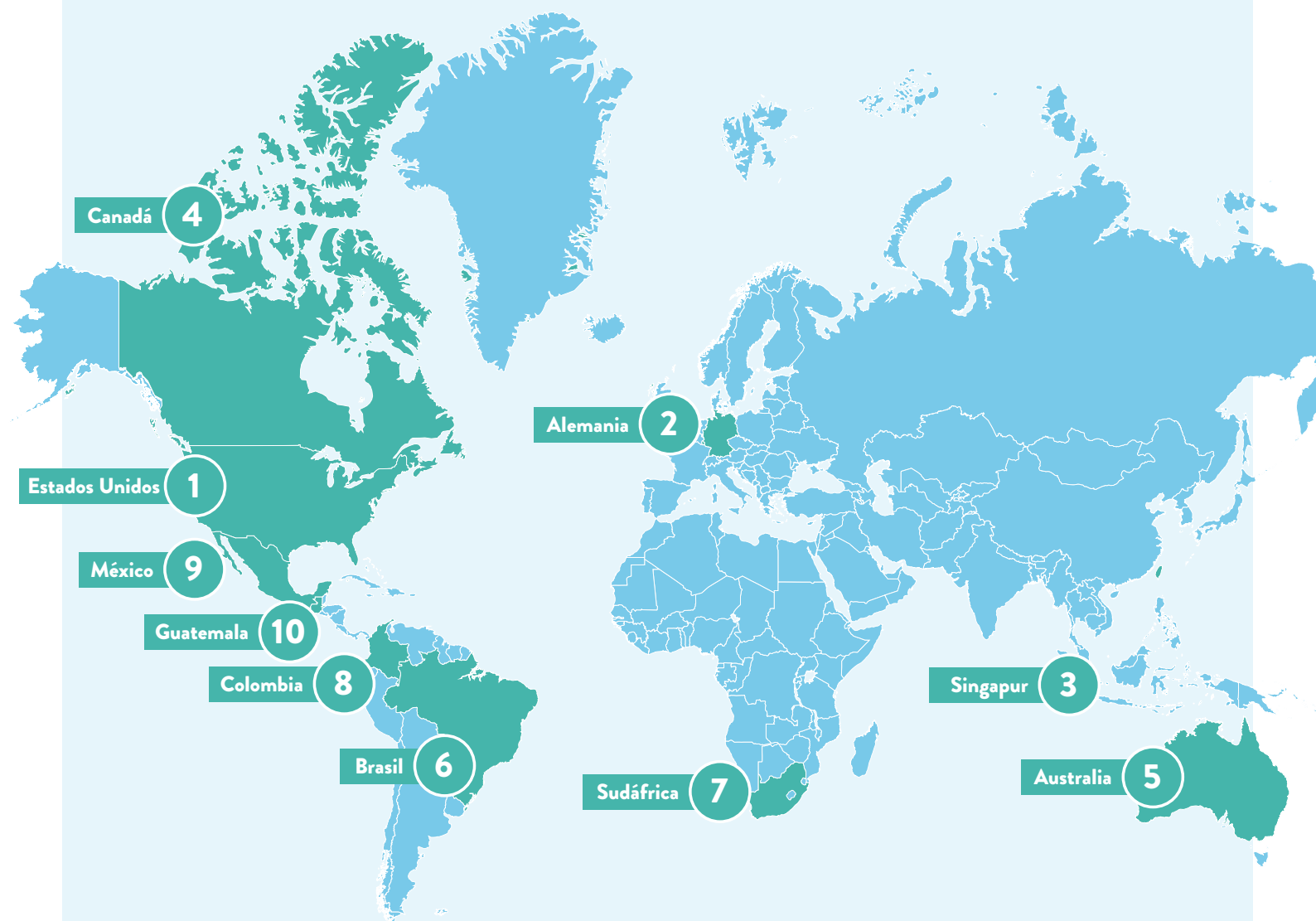
Estados Unidos ocupa el 1er lugar con 98 de 120 puntos, obteniendo los puntajes más altos para todos los indicadores de apoyo regulatorio ASG considerados en este estudio. Alemania le sigue de cerca con 91 puntos. Ambos países se clasifican como poseedores de mecanismos legales avanzados para apoyar la implementación de criterios ASG.

Dentro del grupo de países con disposiciones sólidas para el despliegue de ASG (60–89 puntos) encontramos a Singapur, Canadá, Australia, Brasil y Sudáfrica. Estos países tienen instrumentos proactivos establecidos pero muestran variación entre categorías.

Colombia y México, con 56 y 44 puntos respectivamente, parecen tener regulaciones que proporcionan condiciones básicas para la adopción de prácticas ASG. En contraste, Guatemala obtuvo el puntaje más bajo con solo 4 puntos de 120, indicando una regulación incipiente para apoyar la implementación de estándares Ambientales, Sociales y de Gobernanza.

Comparación del nivel de madurez por país

RANGO	PAÍS	GUÍA	INCENTIVOS	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FINANCIAMIENTO	TOTAL	NIVEL
1	Estados Unidos	26	25	22	25	98	Avanzado
2	Alemania	27	22	22	20	91	Avanzado
3	Singapur	24	20	15	20	79	Sólido
4	Canadá	21	15	17	21	74	Sólido
5	Australia	23	14	19	13	69	Sólido
6	Brasil	18	16	17	16	67	Sólido
7	Sudáfrica	18	10	24	14	66	Sólido
8	Colombia	15	13	15	13	56	Básico
9	México	16	6	16	6	44	Básico
10	Guatemala	2	1	1	0	4	Incipiente



Guía en Ley, Regulación o Política sobre Estándares ASG

[Se relaciona con los Hallazgos Clave 1, 2, 3 y 5]

Alemania y Estados Unidos lideran esta categoría con puntajes de 27 y 26 de 30 respectivamente, reflejando marcos legales integrales con fuertes mecanismos de cumplimiento. La Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (LkSG) de Alemania destaca por sus sanciones de hasta el 10% de la facturación anual, mientras que EE. UU. combina regulaciones ambientales de la EPA, reglas de divulgación de la SEC, protecciones del Título VII y estándares laborales de OSHA en un ecosistema de cumplimiento robusto.

Singapur (24/30) y Australia (23/30) también demuestran marcos fuertes, aunque con diferentes énfasis. La Ley de Conservación de Energía y la Ley de Precios del Carbono de Singapur exigen informes de emisiones con sanciones significativas, mientras que la Ley Nacional de Informes de Energía y Gases de Efecto Invernadero y la Ley de Esclavitud Moderna de Australia crean mecanismos de rendición de cuentas.

Surge un patrón notable en los países de nivel medio: México obtiene 16/30 con leyes climáticas y laborales integrales (Ley General de Cambio Climático, Ley Federal del Trabajo, NOM-035 sobre riesgos psicosociales), pero los mecanismos de cumplimiento recibieron solo 4 de 10 puntos. Esta brecha entre la legislación y la aplicación es la más amplia entre los países de este nivel. De manera similar, Sudáfrica (18/30) tiene protecciones constitucionales y la Ley de Equidad en el Empleo, pero carece de un marco ASG general, confiando en su lugar en códigos voluntarios como CRISA y los Códigos King.

Guatemala (2/30) representa un vacío regulatorio. Como señaló el equipo legal: “No existen regulaciones o políticas específicas sobre estos temas”.

La divulgación emerge como el tema que destaca en los países más avanzados. Estados Unidos, Alemania, Australia y Singapur tienen requisitos de divulgación obligatorios o recomendados para información relacionada con el clima, siguiendo las recomendaciones del TCFD. Esta

transparencia permite a las partes interesadas evaluar el desempeño ASG de las empresas, pero sigue siendo insuficiente sin la aplicación de la ley.

Las multas son el principal instrumento para hacer cumplir las regulaciones relacionadas con ASG, con algunos países exhibiendo otras sanciones que impiden a las empresas acceder a financiamiento o participar en licitaciones públicas. Los marcos legales de Estados Unidos y Canadá también consideran la emisión de órdenes de medidas correctivas para empresas que no cumplen. Los países más avanzados consideran otras sanciones civiles e incluso penales, como prisión en casos de fraude en la divulgación.

Estudio de Caso: Pick n Pay y la Ley de Empoderamiento Económico Negro de Base Amplia

Pick n Pay es un minorista en Sudáfrica que sirve como ejemplo del impacto de la Ley de Empoderamiento Económico Negro de Base Amplia (BBBEE) de 2003, una disposición legal para la “participación efectiva de las personas negras en la economía” (Government Gazette Republic of South Africa, 2004; pp. 2). Esta Ley está acompañada por un mecanismo de calificación gestionado por la agencia de calificación BBBEE, parte del Sistema Nacional de Acreditación de Sudáfrica. El compromiso de las empresas con el BBBEE es evaluado por esta agencia y pueden obtener uno de nueve puntajes que van desde el incumplimiento hasta el cumplimiento total. La Ley BBBEE y los Códigos de Buenas Prácticas publicados por la agencia de calificación BBBEE comprenden estrategias como la participación de personas negras como propietarios o gerentes de empresas y condiciones especiales de contratación como parte de las condiciones necesarias para incluir a la población negra en la economía formal. Como resultado de la adopción de políticas BBBEE, el 80% de la alta gerencia y la gerencia superior, y el 99% de todos los empleados de Pick n Pay eran “Sudafricanos Históricamente Desfavorecidos” (Pick n Pay, 2024).

Incentivos Legales para la Inversión en PyMEs

[Se relaciona con los Hallazgos Clave 4 y 5]

Las pequeñas y medianas empresas forman la columna vertebral de la economía global. Por ejemplo, crean alrededor del 70% de los empleos formales en todo el mundo (Organización Internacional del Trabajo, 2019). Sin embargo, con respecto a la adopción de la sostenibilidad, estas empresas parecen estar rezagadas (Foro Económico Mundial, 2025), no porque no estén dispuestas a incorporar estas prácticas, sino porque deben superar diversos obstáculos, como limitaciones de recursos o un poder reducido para influir en sus ecosistemas empresariales. En este contexto, estas empresas, particularmente aquellas que están creciendo, pueden beneficiarse de incentivos legales para promover la implementación de estándares ASG.

Esta categoría muestra las mayores disparidades entre países. Estados Unidos lidera con 25/30, impulsado por la Ley de Reducción de la Inflación (2022) y la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, que proporcionan créditos fiscales sustanciales y financiamiento para la reducción de gases de efecto invernadero y energía limpia con énfasis en asociaciones con pequeñas empresas. Alemania le sigue con 22/30, ofreciendo deducciones fiscales de hasta el 50% en activos fijos (con un tope de €1 millón anual) más subsidios para energía renovable e innovación social.

Singapur (20/30) proporciona un riesgo compartido del 70% a través de su iniciativa EFS-Green para instituciones financieras que financian proyectos verdes, una cuantía generosa en comparación con otros programas de incentivos. Sin embargo, sus incentivos se centran casi exclusivamente en el clima, con un apoyo limitado para iniciativas de género o trabajo decente.

Aparece una brecha significativa en los países de nivel medio. Brasil (16/30) ofrece una deducción específica del 1% del impuesto sobre la renta para proyectos socioambientales bajo la Ley 9,249/1995, mientras que Australia (14/30) y Canadá (15/30) tienen créditos fiscales generales ESIC y provinciales que no están dirigidos específicamente a PyMEs enfocadas en ASG.

Sudáfrica carece explícitamente de incentivos para PyMEs enfocadas en ASG. Como señalaron los investigadores: “NO hay incentivos financieros para que las corporaciones inviertan en PyMEs que apoyen el clima, el género o el trabajo decente”. El país obtuvo solo 10/30, siendo los incentivos existentes generales en lugar de dirigidos a ASG.

México (6/30) y Guatemala (1/30) representan el nivel inferior. El equipo de investigación de México informó: “No existen incentivos legales para PyMEs”. Los mecanismos disponibles como los bonos verdes y la certificación LEED son voluntarios e impulsados por el sector privado, no incentivos gubernamentales.

Los incentivos fiscales parecen ser más comunes en países con mecanismos avanzados, y la energía es el tema que destaca por los incentivos fiscales disponibles. En general, el género y el trabajo decente quedan al margen de los temas cubiertos por los diferentes tipos de incentivos establecidos para promover la inversión en PyMEs.

Disposiciones Legislativas para Políticas de Contratación Inclusiva

[Se relaciona con los Hallazgos Clave 6 y 7]

La contratación inclusiva presenta un patrón diferente al de otras categorías. Sudáfrica lidera con 24/30, demostrando cómo las políticas de contratación obligatorias pueden impulsar un cambio sistémico. La Ley BBBEE y la Ley Marco de Políticas de Contratación Preferencial (PPPFA) crean un sistema de puntuación integral que evalúa la propiedad, el control de gestión, el desarrollo de habilidades y el desarrollo empresarial. Empresas como Standard Bank y Pick n Pay han logrado calificaciones de Nivel 1, y los contratos gubernamentales requieren el cumplimiento de BBBEE.

Alemania y Estados Unidos empataron con 22/30. La contratación centralizada de Alemania a través del Beschaffungsamt del BMI incluye una plataforma digital lanzada en 2022 que permite a las PyMEs buscar contratos alineados con sus ofertas. Estados Unidos requiere que las agencias federales informen los porcentajes de contratos otorgados a pequeñas empresas y grupos diversos, logrando un récord del 26.5% de los dólares de contratos federales para pequeñas empresas en el año fiscal 2022.

Australia (19/30) demuestra un impacto medible a través de su Política de Contratación Indígena, que resultó en \$1.6 mil millones en contratos con 1,200 empresas indígenas durante 2021-2022. Canadá (17/30) y Brasil (17/30) muestran marcos emergentes, con el Estándar de la Junta del Tesoro de Canadá requiriendo la divulgación de GEI para contratos superiores a \$25 millones y la Ley 14,133/2021 de Brasil promoviendo términos ASG en licitaciones públicas.

Singapur presenta una brecha notable en esta categoría (15/30). A pesar de los marcos avanzados en otras áreas, los investigadores encontraron "ninguna ley o regulación que obligue o incentive políticas de contratación inclusiva". Esto representa un área para el desarrollo potencial de políticas.

México (16/30) tiene disposiciones contra la discriminación en la Ley Federal del Trabajo y requisitos en la Ley General para la Igualdad, pero estos son generales en lugar de específicos para la contratación. Colombia (15/30) tiene leyes que protegen a los trabajadores con discapacidades y promueven la participación de las mujeres, pero con una implementación documentada limitada.

Contratación Gubernamental Centralizada de Alemania

En Alemania, existe una agencia centralizada a nivel del gobierno federal responsable de la contratación de entidades civiles (República Federal de Alemania, s.f.). Como parte de sus iniciativas, en 2022 crearon un servicio de anuncios públicos donde las empresas pueden ver licitaciones provenientes de diferentes autoridades, desde locales hasta federales. El nuevo servicio de publicación permite a las empresas buscar exactamente el tipo de licitaciones que se alinean con su oferta. Otras funcionalidades hacen que la plataforma sea fácil de usar.

Red para la Contratación Sostenible

En 2010, se fundó la Colaboración Canadiense para la Contratación Sostenible (Reeve Consulting, 2025). Es una red de instituciones en el sector público. Para acceder a todos los servicios proporcionados por la red, que incluyen intercambio de conocimientos, recursos e incluso apoyo personalizado, las instituciones deben convertirse en miembros (Reeve Consulting, s.f.). El trabajo de la red se organiza en función de los pilares de la contratación sostenible que abordan el medio ambiente, la ética, los impactos sociales de esta actividad y la participación de las comunidades indígenas (Reeve Consulting, 2025). Como parte de la red, las instituciones pueden participar en un punto de referencia (benchmark) de mejores prácticas que les permite informar un proceso de mejora continua. Además, la red publica un informe anual mostrando sus resultados, casos de éxito y destacando tendencias en la contratación sostenible.

Establecimiento de Objetivos y Evaluación de Resultados

En Australia, la Política de Contratación Indígena entró en implementación en 2015. Su objetivo era promover el desarrollo empresarial indígena, a través de su participación como proveedores de las diferentes agencias gubernamentales del Commonwealth de Australia (Agencia Nacional de Indígenas Australianos, Gobierno de Australia, s.f.). La política, enmendada en 2025, requiere que se establezcan objetivos tanto para el número como para el valor de los contratos otorgados a empresas indígenas. Los resultados no solo se evalúan, sino que también se comunican al público cada año. Para apoyar la implementación de la política, el gobierno de Australia también emitió directrices para actores clave del proceso, como las personas a cargo de las adquisiciones, y otros recursos como muestras de cláusulas contractuales.

Estrategias de Financiamiento Gubernamental para PyMEs

[Se relaciona con los Hallazgos Clave 4, 6 y 8]

Estados Unidos lidera esta categoría con 25/30, ofreciendo múltiples vías a través de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA): Centros de Negocios para Mujeres, el programa 8(a) para grupos socialmente desfavorecidos, financiamiento EXIM para exportadores y la Iniciativa de Crédito Estatal para Pequeñas Empresas (\$10 mil millones). La Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios brinda apoyo adicional para emprendedores diversos.

Canadá (21/30) y Alemania (20/30) siguen con sistemas integrales pero complejos. El programa de Mujeres e Igualdad de Género (WAGE) de Canadá, el Fondo de Préstamos para el Emprendimiento de Mujeres y el Fondo de Economía Baja en Carbono (\$1.4 mil millones) proporcionan múltiples puntos de entrada.

En 2024, la tasa de participación laboral de las mujeres de entre 25 y 54 años alcanzó un récord del 85%; esta cifra abarca tanto a quienes cuentan con empleo a tiempo completo o parcial como a aquellas que lo buscan activamente. A pesar de este avance y de las protecciones mencionadas, las mujeres ganaron, en promedio, 87 centavos por cada dólar percibido por los hombres. Esta brecha salarial de género es aún más pronunciada para las mujeres negras, indígenas y pertenecientes a otros grupos racializados. (Gobierno de Canadá – Datos, estadísticas e impacto: Igualdad de género).

Sin embargo, el 23 de abril de 2025, los Administradores de Valores de Canadá (CSA, por sus siglas en inglés) anunciaron una pausa en el desarrollo de enmiendas a los requisitos vigentes sobre divulgación de diversidad. El presidente de la CSA, Stan Magidson, explicó que el panorama económico y geopolítico mundial ha cambiado rápida y significativamente en los últimos meses; esta pausa busca apoyar a los mercados y emisores canadienses mientras se adaptan a los acontecimientos recientes, tanto en Estados Unidos como a nivel global.

En su comunicado, la CSA indicó que supervisará la evolución normativa en materia de divulgación climática y de diversidad, con la expectativa

de retomar estos temas en el futuro. Mientras tanto, continuará vigilando la información presentada por los emisores y trabajando para abordar la divulgación engañosa, incluyendo el greenwashing. Respecto a la divulgación sobre diversidad, los emisores principales (no pertenecientes al mercado de riesgo) seguirán obligados a informar sobre la representación de mujeres en sus consejos de administración y cargos ejecutivos, conforme a los requisitos actuales del Instrumento Nacional 58-101: Divulgación de Prácticas de Gobierno Corporativo. (CSA – Actualización sobre el enfoque en proyectos de divulgación climática y de diversidad)(Norton Rose Fulbright – Administradores de Valores de Canadá ponen en espera la divulgación climática y de diversidad mejorada).

Otro caso canadiense destacable son los Créditos Fiscales a la Inversión en Economía Limpia. En total, Canadá ha introducido cinco grandes créditos fiscales a la inversión (ITC, por sus siglas en inglés) para la economía limpia mediante los presupuestos de 2022 a 2025. Se trata de un crédito fiscal reembolsable aplicable al capital invertido en la adopción y operación de nuevos bienes de tecnología limpia en Canadá entre el 28 de marzo de 2023 y el 31 de diciembre de 2034. La tasa de este ITC puede alcanzar hasta el 30%.

Alemania ofrece apoyo a través de SEND, Social Impact Fund, DKTl y GIZ, aunque el acceso requiere navegar por Förderrichtlinien (directrices de financiamiento) detalladas caso por caso.

Singapur (20/30) proporciona mecanismos de financiamiento claros, incluidos préstamos EFS-Green de hasta S\$50 millones, Subvención de Desarrollo Empresarial (hasta el 70% para proyectos de sostenibilidad) y el Esquema de Subvención de Préstamos Sostenibles de MAS. Sin embargo, los criterios tienden a favorecer a las empresas establecidas sobre las PyMEs en etapa inicial.

Brasil (16/30) ofrece Desenvolve SP, Floresta+ y fondos patrimoniales de la Ley 13,800, con acceso a través de procedimientos del BACEN

y del Ministerio del Medio Ambiente. Sudáfrica (14/30) tiene programas SEDA y SEFA, pero los investigadores señalaron que “la mayoría de los esquemas NO se dirigen específicamente a las MIPYMES que se centran en el trabajo decente, la igualdad de género y el cambio climático”.

Australia (13/30) carece de grandes esquemas de financiamiento legislativo para PyMEs enfocadas en ASG, con subvenciones dispersas entre departamentos y accesibles a través de GrantConnect. Colombia (13/30) tiene Fondo Mujer Emprende y programas bajo la Ley 2125/2021 dirigidos a 15 categorías de mujeres vulnerables, pero con múltiples requisitos documentales.

México (6/30) y Guatemala (0/30) representan brechas críticas. El equipo de investigación de México declaró: “No hay esquemas legislativos y de financiamiento para PyMEs con estos objetivos específicos”. La respuesta de Guatemala en todas las preguntas de financiamiento fue “N/A” o “No existen estrategias de financiación”.

Incluso en países en niveles avanzados y sólidos, donde existen fondos dedicados a las PyMEs, el acceso a ellos puede no ser fácil. Tal contradicción reduce la efectividad y el impacto de la estrategia de financiamiento establecida por el gobierno.

Programa Coppel Emprende

Coppel Emprende es un programa de la fundación de Grupo Coppel, un importante minorista y proveedor de servicios financieros mexicano (Fundación Coppel, s.f.). Coppel Emprende es parte de la línea de acción que promueve el desarrollo económico y social y tiene como objetivo brindar capacitación a micro y pequeños empresarios y desarrollar competencias comerciales que les ayuden a detonar el crecimiento empresarial y un impacto social positivo en su entorno. Dentro del programa más amplio Coppel Emprende, Coppel Emprende Capital Semilla es una iniciativa lanzada en 2023 que trabaja con el apoyo de gobiernos locales, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales locales para apoyar a emprendedores comunitarios. Una vez que se completa el 45% del contenido de aprendizaje disponible en la plataforma Coppel Emprende, los participantes se vuelven elegibles para capital semilla. Los 50 mejores emprendedores por estado son seleccionados en función de su desempeño y cada uno recibe hasta MXN \$8,000 (aproximadamente USD \$470) en especie, totalizando MXN \$400,000 (aproximadamente USD \$23,500) por estado (Estrella, 2025; Rosales, 2025). Los recursos otorgados son resultado de las contribuciones de las instituciones participantes.

Estudio de Caso: BanCO₂

Una iniciativa promovida por CORNARE, una entidad pública en Colombia, Bancolombia, un banco privado, y una ONG llamada MASBOSQUES, BanCO₂ fue lanzada en 2013 (Bancolombia, 2016). BanCO₂ conecta a diferentes partes interesadas en los sectores público y privado, así como dentro de la sociedad civil, particularmente en áreas rurales, para financiar la preservación de los recursos naturales en el país (BanCO₂, s.f.). Hay varias formas para que las empresas proporcionen fondos: una es voluntaria y otra está asociada con la compensación obligatoria cuando un proyecto necesita una licencia para operar debido al impacto de sus actividades en el medio ambiente. También hay compensación relacionada con proyectos que requieren la tala de árboles y otros asociados con la protección de especies en peligro de extinción. Familias o comunidades firman acuerdos voluntarios y reciben el pago a través de una cuenta bancaria con Bancolombia. Hasta la fecha, 107 empresas han compensado sus emisiones de carbono a través de BanCO₂, asegurando así el flujo de

recursos a más de dos mil familias que son recompensadas por los servicios ambientales que brindan para preservar 61,546 hectáreas (BanCO₂, s.f.).

Desafío de Cero Emisiones Netas (Net-Zero Challenge)

El Gobierno de Canadá también ha introducido el Desafío de Cero Emisiones Netas, una iniciativa que “alienta a las empresas a desarrollar e implementar planes creíbles y efectivos para transitar sus instalaciones y operaciones hacia las emisiones netas cero para 2050”. No se trata de un requisito legal, sino de un programa del Gobierno Federal que ofrece a las empresas adheridas una comunidad para intercambiar mejores prácticas y crear una hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono. Al 12 de diciembre de 2025, la iniciativa contaba con 322 participantes. (Gobierno de Canadá – The Net-Zero Challenge)

no cumplían con los estándares federales de emisiones. Se ordenó a Volkswagen pagar 196.5 millones de dólares tras declararse culpable de 60 cargos por infracciones a la Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA), incluyendo el suministro de información engañosa y la importación ilegal de vehículos.

Más allá de estos requisitos legislativos de divulgación, existe, por supuesto, una amplia gama de requisitos ambientales federales más generales que no se citan en este informe.

Nota sobre: Greenwashing y la Legislación de Protección Ambiental en Canadá

Las enmiendas a la Ley de Competencia entraron en vigor el 20 de junio de 2024, incorporando modificaciones para combatir el greenwashing (lavado de imagen verde) mediante:

- El requisito de que las afirmaciones sobre los beneficios ambientales de un producto estén respaldadas por pruebas adecuadas y suficientes; y
- El requisito de que las afirmaciones sobre los beneficios ambientales de una empresa o actividad empresarial se fundamenten en una comprobación adecuada y suficiente, conforme a una metodología reconocida internacionalmente.

La justificación de los cambios realizados en 2024 y 2025 radica en la percepción de que estas disposiciones sobre greenwashing están generando incertidumbre en la inversión y provocando “el efecto contrario al deseado, llevando a algunas partes a ralentizar o revertir sus esfuerzos de protección ambiental”. (Gobierno de Canadá – Presupuesto 2025 – Capítulo 1: Construir una economía canadiense más fuerte).

Un caso destacado de greenwashing en Canadá involucró a Volkswagen y Audi, debido a la importación de 128,000 vehículos que

Metodología

Los equipos legales de cada país respondieron a un cuestionario estandarizado que aborda cuatro categorías de apoyo legal ASG: (1) Guía en Ley, Regulación o Política sobre Estándares ASG, examinando la existencia, claridad y aplicabilidad de las leyes que abordan la igualdad de género, la acción climática y el trabajo decente; (2) Incentivos Legales para la Inversión en PyMEs, cubriendo exenciones fiscales, subvenciones o mecanismos financieros que fomentan la inversión corporativa en pequeñas empresas enfocadas en temas ASG; (3) Disposiciones Legislativas para Políticas de Contratación Inclusiva, revisando leyes que promueven la contratación de proveedores liderados por diversos grupos, como empresas propiedad de mujeres, minorías y que incluyen a personas con discapacidad; y (4) Estrategias de Financiamiento Gubernamental para PyMEs, evaluando programas de financiamiento público, criterios de accesibilidad y efectividad de los mecanismos de apoyo.

Cada categoría fue evaluada en tres subcategorías, con puntajes que van de 0 a 10 puntos cada una. Los puntajes de 0-2 indican disposiciones limitadas o vagas con una aplicación débil o nula; 3-5 reflejan disposiciones específicas pero estrechas con una aplicación moderada; y 6-10 representan disposiciones integrales con una fuerte aplicación y sanciones significativas. El puntaje máximo por categoría es de 30 puntos, produciendo un puntaje total máximo de 120 puntos en las cuatro categorías. Las subcategorías para cada dimensión se detallan en la siguiente tabla:

Basado en los puntajes totales, los países fueron clasificados en cuatro niveles: Incipiente (0-29 puntos), indicando pocas o ninguna disposición legal ASG; Básico (30-59), con disposiciones mínimas establecidas; Sólido (60-89), donde instrumentos proactivos están presentes en el marco legal; y Avanzado (90-120), reflejando mecanismos integrales de apoyo ASG.

Este estudio tiene varias limitaciones metodológicas. Primero, los datos fueron recolectados por diez equipos legales diferentes, y aunque todos siguieron el mismo cuestionario, las variaciones en la interpretación, la profundidad del análisis y la familiaridad con los marcos ASG pueden haber influido en la consistencia de la puntuación. Segundo, la investigación se realizó entre 2023 y 2024, y los marcos legales evolucionan continuamente. Desarrollos significativos han ocurrido desde la recolección de datos, incluidas las reglas obligatorias de divulgación climática en los Estados Unidos (SEC, 2024) y Singapur (2024); los informes de sostenibilidad obligatorios de Brasil para empresas cotizadas (Resolución CVM 193, 2023); los Estándares de Información de Sostenibilidad (NIS) de México vigentes a partir de enero de 2025; y la Ley de Lucha contra el Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil en las Cadenas de Suministro de Canadá (2024). Estos desarrollos pueden haber alterado el posicionamiento relativo de algunos países. Tercero, este estudio evalúa las leyes y regulaciones tal como están escritas; las brechas de implementación, las prácticas informales y los factores culturales que afectan la adopción de ASG no fueron evaluados sistemáticamente.

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA 1	SUBCATEGORÍA 2	SUBCATEGORÍA 3
Guía en Ley	Presencia de leyes	Claridad de estándares	Mecanismos de cumplimiento
Incentivos Legales	Disponibilidad de incentivos	Comparación con otros sectores	Impacto en temas ASG
Contratación Inclusiva	Existencia de leyes	Estudios de caso/ejemplos	Evaluación de impacto
Financiamiento Gubernamental	Programas disponibles	Accesibilidad	Efectividad

Perfiles de Países

Los siguientes perfiles sintetizan los hallazgos en las cuatro categorías para cada país, ordenados por clasificación general. Cada perfil destaca fortalezas distintivas, brechas notables y factores contextuales relevantes que dan forma a cómo operan los marcos ASG en la práctica.

Estados Unidos (98/120 – Avanzado)

Estados Unidos demuestra el marco legal ASG más completo en este estudio, con fuertes puntajes en las cuatro categorías. Su fortaleza radica en la combinación de regulaciones federales robustas (EPA, SEC, OSHA), programas de financiamiento sustanciales (SBA, EXIM) e inversiones legislativas recientes a través de la Ley de Reducción de la Inflación. El sistema de contratación federal logró una participación récord de pequeñas empresas del 26.5% en el año fiscal 2022. Las áreas de mejora incluyen un mayor énfasis en las dimensiones sociales más allá de las leyes contra la discriminación.

Alemania (91/120 – Avanzado)

Alemania lidera en Guía (27/30), impulsada por la Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro con sus sanciones del 10% de la facturación. El país combina una fuerte aplicación de la ley con una plataforma de contratación digital centralizada y múltiples canales de financiamiento (SEND, GIZ, DKT). Sin embargo, los requisitos complejos de las Förderrichtlinien pueden crear barreras de acceso para las empresas más pequeñas.

Singapur (79/120 – Sólido)

Singapur sobresale en la regulación enfocada en el clima a través de su Ley de Precios del Carbono y la Ley de Conservación de Energía, con la aplicación a través de la Agencia Nacional de Medio Ambiente. El riesgo compartido del 70% de EFS-Green representa un apoyo generoso para proyectos verdes. Existen brechas notables en las políticas de contratación inclusiva (15/30) y en la legislación que aborda el género y el trabajo decente, donde los investigadores no encontraron leyes específicas.

Canadá (74/120 – Sólido)

Canadá muestra un desempeño equilibrado con marcos sólidos en todas las categorías. Las fortalezas incluyen el programa WAGE para la equidad de género, el Fondo de Préstamos para el Emprendimiento de Mujeres y la legislación emergente sobre la cadena de suministro (Ley de Trabajo Forzoso 2024). La Colaboración Canadiense para la Contratación Sostenible proporciona un modelo para el aprendizaje entre pares. La variación provincial en la aplicación de la ley representa una limitación clave.

Australia (69/120 – Sólido)

Australia demuestra una fuerte orientación (23/30) a través de leyes de informes obligatorios (NGER, Esclavitud Moderna) y una Política de Contratación Indígena efectiva que logró \$1.6 mil millones en contratos con empresas indígenas. Sin embargo, los incentivos limitados dirigidos a PyMEs enfocadas en ASG (14/30) y el financiamiento gubernamental fragmentado (13/30) indican áreas para el desarrollo de políticas.

Brasil (67/120 – Sólido)

Brasil ofrece un apoyo equilibrado con mecanismos específicos, incluida la deducción del 1% del impuesto sobre la renta para proyectos socioambientales y la Ley 14,133/2021 que promueve ASG en la contratación pública. La Ley de Delitos Ambientales proporciona sanciones penales, administrativas y de restitución. El acceso al financiamiento a través de procedimientos del BACEN y del Ministerio del Medio Ambiente sigue siendo complejo para las empresas más pequeñas.

Sudáfrica (66/120 – Sólido)

Sudáfrica presenta un perfil único, liderando en contratación (24/30) a través del marco BBBEE reconocido mundialmente, mientras carece explícitamente de incentivos de inversión dirigidos a ASG (10/30). El cuadro de mando BBBEE que cubre la propiedad, la gestión y el desarrollo empresarial demuestra cómo los mecanismos positivos pueden impulsar un cambio sistémico. Extender este enfoque a los incentivos de inversión para PyMEs representa una oportunidad.

Colombia (56/120 – Básico)

Colombia muestra marcos moderados en todas las categorías con disposiciones específicas para empresas dirigidas por mujeres (Decreto 761/2022) y programas innovadores como Manzanas del Cuidado reconocidos por la OCDE. Las circulares de la Superintendencia Financiera requieren la divulgación ASG para emisores de valores. La Ley 2125/2021 crea incentivos para 15 categorías de mujeres emprendedoras vulnerables, aunque el acceso requiere una documentación extensa.

México (44/120 – Básico)

México presenta la brecha más amplia entre los fundamentos legales y el apoyo a la implementación. Existen protecciones constitucionales y legislación climática (Ley General de Cambio Climático, Taxonomía Sostenible en fase piloto), pero los investigadores encontraron prácticamente ningún incentivo (6/30) o financiamiento (6/30) para PyMEs enfocadas en ASG. La brecha entre la presencia de legislación (16/30) y la capacidad de ejecución (4/10 en la subcategoría de cumplimiento) destaca los desafíos de implementación. Iniciativas privadas como Coppel Emprende llenan algunos vacíos.

Guatemala (4/120 – Incipiente)

Guatemala representa un vacío regulatorio en todas las dimensiones ASG. Los investigadores señalaron que “no existen regulaciones o políticas específicas sobre estos temas” y las respuestas a las preguntas de financiamiento e incentivos fueron consistentemente “N/A”. Esto representa la brecha más significativa en los marcos ASG latinoamericanos entre los países estudiados.

Conclusiones

El objetivo de este estudio fue identificar los mecanismos legales disponibles para fomentar la adopción de estándares Ambientales, Sociales y de Gobernanza relacionados con género, clima y trabajo decente, con especial énfasis en aquellas disposiciones dirigidas a las PyMEs. Además, buscamos arrojar luz sobre las brechas que permanecían en los marcos legales y las mejores prácticas con potencial aplicación en América Latina. Así, con la ayuda de varias firmas de abogados, recolectamos datos y evaluamos los marcos legales de 10 países en cuatro categorías.

El análisis revela varios hallazgos clave:

- **Si bien existen al menos leyes y regulaciones rudimentarias que apoyan la adopción de estándares ASG relacionados con género, clima y trabajo decente en la mayoría de los países, su aplicación varía de un país a otro dependiendo de diferentes factores internos, creando así una brecha en las prácticas reales.**
- **Ejemplos como el del BBBEE en Sudáfrica muestran que la aplicación de la ley no necesita estar asociada con sanciones, ya que existen otros mecanismos positivos que pueden ser más efectivos para la adopción de ASG.**
- **A pesar de que la divulgación es una condición necesaria para la adopción de ASG, puede no ser suficiente. En consecuencia, el aseguramiento por terceros, como también muestra la calificación BBBEE, puede ser una buena práctica que podría ayudar a avanzar en la implementación de estándares ASG.**
- **La disponibilidad de financiamiento para PyMEs dedicadas a desarrollar soluciones a problemas sociales y ambientales no es suficiente. Las instituciones que ofrecen estos fondos también deben desarrollar procesos de solicitud y criterios de elegibilidad que faciliten el acceso en lugar de dificultarlo.**
- **La mayoría de los marcos legales en la muestra parecen abordar temas en la dimensión ambiental de ASG, prestando algo menos de atención a los problemas sociales. Avanzar en la agenda de sostenibilidad requiere incorporar todas sus dimensiones. Una buena práctica podría ser partir de un buen diagnóstico de los temas en los que cada país se está quedando atrás, para establecer prioridades y estrategias para mejorarlos.**

Recomendaciones

Estos hallazgos señalan pasos accionables para los responsables de políticas, instituciones y PyMEs:

Para los Responsables de Políticas:

- Fortalecer los mecanismos de cumplimiento: Las regulaciones existen pero se aplican de manera inconsistente. Se necesitan mecanismos de cumplimiento y monitoreo más fuertes para cerrar la brecha entre las disposiciones legales y las prácticas reales.
- Desarrollar incentivos positivos: Los mecanismos no punitivos (por ejemplo, sistemas de calificación, contratación preferencial, certificaciones) pueden ser más efectivos que las sanciones por sí solas, como lo demuestra la experiencia del BBEE en Sudáfrica.
- Equilibrar las dimensiones ASG: La mayoría de los marcos legales enfatizan los problemas ambientales. Las dimensiones sociales (igualdad de género, derechos laborales) requieren un mayor enfoque para avanzar en una agenda de sostenibilidad integral.
- Implementar aseguramiento por terceros: Los mecanismos de verificación independiente deben complementar los requisitos de divulgación para garantizar la precisión y la confiabilidad.

Para las Instituciones de Financiamiento:

- Simplificar el acceso: Los gobiernos e instituciones deben agilizar los procesos de solicitud para asegurar que las PyMEs puedan acceder de manera realista a los fondos disponibles.
- Establecer y comunicar objetivos: Siguiendo el ejemplo de Australia, establecer objetivos específicos para iniciativas de apoyo ASG crea rendición de cuentas y permite la mejora continua.

Para las PyMEs:

- Aprovechar las asociaciones público-privadas: Colaborar con iniciativas del gobierno y del sector privado que proporcionan capacitación, recursos y financiamiento para prácticas de sostenibilidad.

- Explorar plataformas de contratación digital: Los sistemas de contratación centralizados en países como Alemania y Canadá ofrecen oportunidades para que las empresas más pequeñas accedan a contratos gubernamentales.
- Buscar certificación y calificaciones: Las certificaciones voluntarias y las calificaciones ASG pueden agregar valor a los negocios y abrir puertas a nuevas oportunidades.

Para Futuras Investigaciones:

- Realizar estudios de seguimiento para rastrear los cambios en los marcos legales desde la recolección de datos original.
- Ampliar la muestra para incluir países adicionales, particularmente en América Latina y otros mercados emergentes.
- Investigar las barreras específicas que enfrentan las PyMEs para acceder al financiamiento relacionado con ASG y desarrollar soluciones específicas.

Para Responsables de Políticas e Instituciones Latinoamericanas:

- Aprovechar las iniciativas regionales: Las plataformas existentes como la agenda de sostenibilidad de la Alianza del Pacífico, los programas de financiamiento verde de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el apoyo de BID Lab para PyMEs impulsadas por el impacto ofrecen oportunidades para el aprendizaje entre países y la movilización de recursos.
- Construir sobre cimientos existentes: Países como Brasil (índice de sostenibilidad ISE de B3 desde 2005) y Colombia (Protocolo Verde para el sector financiero desde 2012) tienen iniciativas pioneras que pueden informar las mejores prácticas regionales.
- Abordar la brecha de financiamiento: La IFC estima una brecha de financiamiento de \$5 billones para las PyMEs en mercados emergentes. Los bancos de desarrollo regionales y los mecanismos de financiamiento mixto pueden ayudar a canalizar recursos a las PyMEs que trabajan en soluciones ASG.

Referencias

ANDE. (n.d.). Small and Growing Businesses. Recuperado de <https://andeglobal.org/why-sgbs/>

BancO2. (s.f.). Qué hacemos. Recuperado de <https://banco2.com/que-hacemos-en-banco2/>

Bancolombia. (2016, Noviembre 16). BanCO2, la estrategia ambiental que le aporta a la paz. Recuperado de <https://www.bancolombia.com/acerca-de/sala-prensa/noticias/responsabilidad-social-ambiental/banco2-la-estrategia-ambiental-que-le-aporta-a-la-paz>

Estrella, V. (2025, Julio 10). Emprendedores de Querétaro podrán acceder a capital semilla. Recuperado de <https://www.eleconomista.com.mx/estados/emprendedores-queretaro-podran-acceder-capital-semilla-20250710-767629.html>

Federal Republic of Germany. (n.d.). Public procurement: How to obtain government contracts. Recuperado de <https://verwaltung.bund.de/portal/EN/info-pages/vergabe>

Fundación Coppel. (s.f.). CoppelEmprende. Recuperado de <https://www.fundacioncoppel.org/coppel-emprende/>

Government Gazette Republic of South Africa. (2004, January 9). Broad-Based Black Economic Empowerment Act, 2003. Recuperado de https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a53-030.pdf

International Labour Organization. (2019, October). IndoStories, The power of small: Unlocking the potential of SMEs. Recuperado de <https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/SMEs#power-of-small>

IFC. (2017). MSME Finance Gap: Assessment of the Shortfalls and Opportunities in Financing Micro, Small and Medium Enterprises in Emerging Markets. Washington, DC: International Finance Corporation.

National Indigenous Australian Agency, Australian Government. (n.d.). Indigenous Procurement Policy (IPP). Recuperado de <https://www.niaa.gov.au/our-work/employment-and-economic-development/indigenous-procurement-policy-ipp#ipp-dataresults>

OECD. (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Paris: OECD Publishing.

Pick n Pay (2024). Pick n Pay Sustainability Report 2024. Recuperado de <https://www.picknpayinvestor.co.za/pdf/sustainability-reports/2024/pnp-2024-sustainability-report-and-databook-single-pages.pdf>

Reeve Consulting. (2025). Canadian Collaboration for Sustainable Procurement Annual Report 2024. Recuperado de https://www.reeveconsulting.com/wp-content/uploads/2025/03/CCSP-2024-Annual-Report_The-State-of-Sustainable-Public-Procurement-in-Canada.pdf

Reeve Consulting. (n.d.). The CCSP Annual Report 2024. Recuperado de <https://www.reeveconsulting.com/about-ccsp/#:~:text=The%20Canadian%20Collaboration%20for%20Sustainable,values%20and%20commitments%20on%20sustainability>

Rosales, P. (2025, Julio 11). Capital Semilla 2025 de Coppel Emprende, ¿Cómo aplicar en Querétaro? Recuperado de <https://www.liderempresarial.com/capital-semilla-2025-de-coppel-emprende-como-aplicar-en-queretaro/>

United Nations. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights. Geneva: United Nations Human Rights Office.

World Economic Forum. (2025, June). Sustainability Meets Growth: A Roadmap for SMEs and Mid-Sized Manufacturers. Recuperado de https://reports.weforum.org/docs/WEF_Sustainability_Meets_Growth_2025.pdf

Esta investigación fue realizada por ANDE, TrustLaw, Thomson Reuters Foundation y equipos legales de: Hogan Lovells (Australia, México, Singapur); Clifford Chance LLP (Estados Unidos); Machado, Meyer Sendacz e Opice (Brasil); Muñoz Tamayo y Asociados (Colombia); Bowmans (Sudáfrica); Consortium Legal (Guatemala); McInnes Cooper LLP (Canadá); y Allen and Overy LLP (Alemania).

Publicado por:

Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE), 2025

Coordinación y Supervisión **TrustLaw Thompson Reuters Foundation**

Maria Candela Zunino, Senior Legal Programme Manager

Despachos participantes:

Hogan Lovells: Australia; Mexico; Singapore

Tayde Bautista Lozano

Lila Alejandra Gasca Enríquez

Mariana Ávila

Anna Liddell

Bowmans: South Africa

Fatima Laher

Yashwi Pattni

Kristy Brough

Richard Griffin

Clifford Chance LLP: United States

Patrick Jackson

Consortium Legal: Guatemala

Pedro Luis Toribio

Cristina Rodriguez

Nicole Montenegro

Machado, Meyer Sendacz e Opice: Brazil

Juliana Meneghelli de Barros

Rebeca Juvenal

Ana Beatriz Bomtorin

Maria Inácia Brito

Heloísa Sato

McInnes Cooper LLP: Canada

Melanie Gillis

Lucia Westin-Eastaugh

Alexandra Gosse

Brianna Desveaux

Paige Chisholm

Muñoz Tamayo y Asociados: Colombia

Cristina Rodriguez

Silvia María Méndez Parodi

Allen and Overy LLP: Germany

Tom Haeseler

Autor:

Aspen Network of Development Entrepreneurs

Dr. Pedro Martinez Estrada, Director Regional para Latinoamérica

Mtro. José Antonio Ibáñez Rubio, Coordinador senior de proyecto

Iván Josué Ponce Guevara, Diseño gráfico y editorial

Redacción:

Dra. Christiane Molina Estrada, Tec de Monterrey

Maria Candela Zunino, Senior Legal Programme Manager TrustLaw TRF

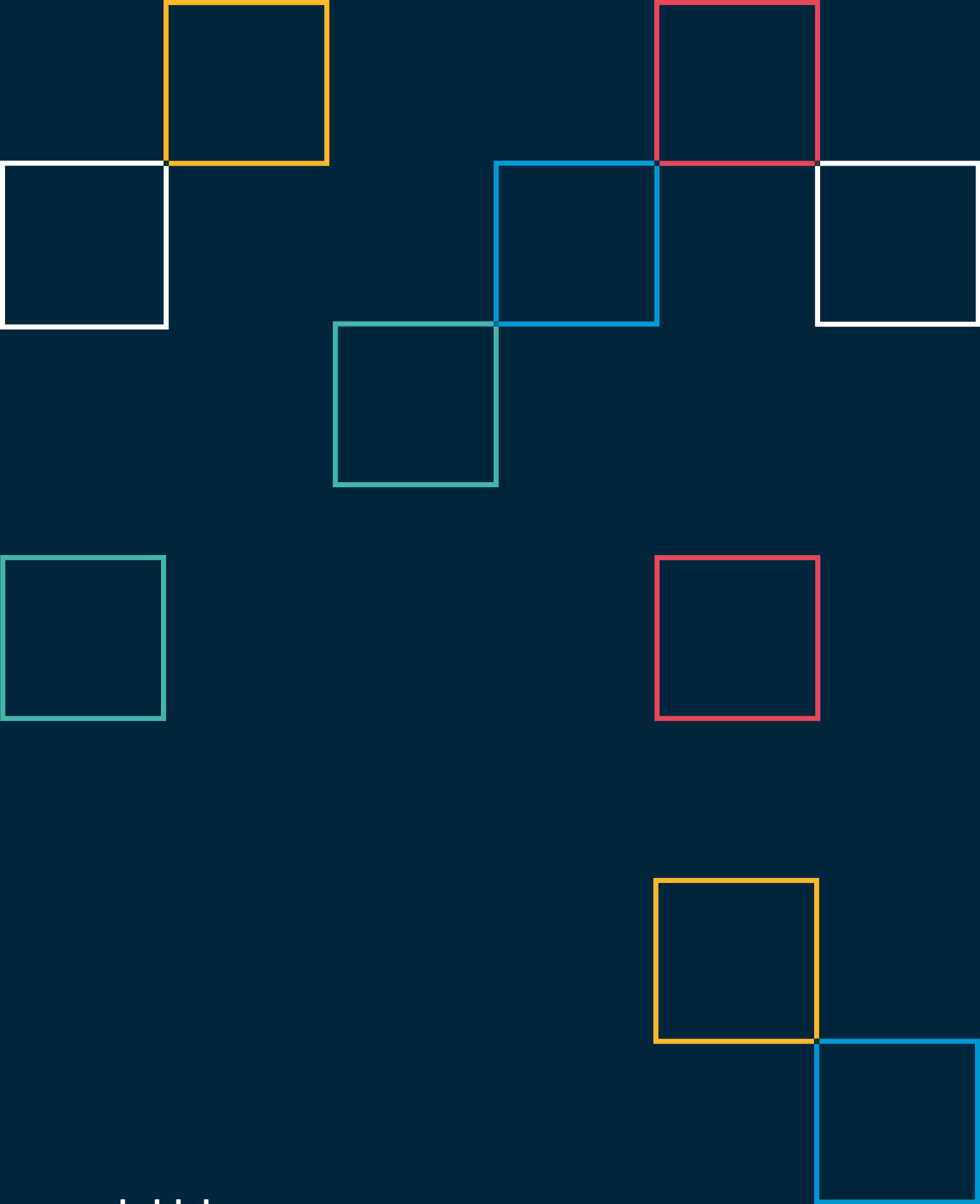
Camila Estella, Latam Programme Officer TrustLaw TRF

This report is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. Readers should seek qualified legal counsel regarding their specific circumstances.

While we intend the contents to be correct and up to date at the time of publication (2025), we do not guarantee their accuracy or completeness, particularly as circumstances may change after publication.

The participating law firms and the Thomson Reuters Foundation, accept no liability or responsibility for actions taken or not taken or any losses arising from reliance on this report or any inaccuracies herein.

Hogan Lovells generously provided pro bono research that helped to make this report/guide possible. Thomson Reuters Foundation, through the TrustLaw global pro bono legal network, made the research possible by facilitating the pro bono connection. However, the contents reflect solely the views of ANDE and not those of the contributing legal teams or Thomson Reuters Foundation.



andeglobal.org



ANDE



**Thomson Reuters
Foundation**

TrustLaw



**EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey**